

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Una luz al final del túnel [Light at end of tunnel]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Pizarro Leongómez, Eduardo
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-06-14 23:28:52
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218824

Nueva Sociedad Separatas

Eduardo Pizarro Leongómez

Una luz al final del túnel. Balance estratégico del conflicto armado en Colombia

Artículo aparecido en Nueva Sociedad 192, julio-agosto 2004, pp 72-84.

Una luz al final del túnel

Balance estratégico del conflicto armado en Colombia

El final del conflicto armado en Colombia ya se vislumbra en el horizonte. Al complejo y difícil proceso de negociación con las AUC, se añade ahora el inicio de las conversaciones con el ELN. Más temprano que tarde, va a ocurrir lo mismo con las FARC. Tanto el tiempo internacional como el nacional corren a contravía de los actores armados no estatales. Las AUC, las FARC y el ELN están sufriendo, a su vez, un creciente aislamiento internacional, un progresivo repudio de la opinión pública interna y un dramático debilitamiento de su capacidad militar.

Eduardo Pizarro Leongómez

La guerra cada día tiene menos cabida. Las cifras son contundentes. De acuerdo con el reciente informe del Stockholm International Peace Institute (Sipri)¹, en 2003 hubo en el mundo un total de 19 conflictos armados mayores (es decir, aquellos que producen más de 1.000 muertes por año) en 18 países. Con la sola excepción de 1997, cuando hubo 18 conflictos, esta es la cifra más baja desde el fin de la Guerra Fría en 1989. Solo 2 confrontaciones (la de India y Paquistán por la región musulmana de Cachemira y la guerra en Irak) fueron, propiamente, interestatales. Las demás fueron inter-interestatales: 4 en África, 14 en Asia y 1 en América Latina: la de Colombia.

Eduardo Pizarro Leongómez: sociólogo colombiano; profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales - Iepri, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá; columnista del diario *El Tiempo*.

Palabras clave: conflicto armado, AUC, ELN, FARC, Gobierno, Colombia.

1. *Sipri Yearbook 2004: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford University Press, Oxford, 2004; v. en especial el capítulo 3, «Major Armed Conflicts», redactado por Renata Dwan y Micaela Gustavsson.

Esta disminución de los conflictos armados en el mundo –la mayoría de los cuales se resolvió por la vía de la negociación política con mediación internacional– es una fuente de optimismo para Colombia. Existe, sin embargo, un hecho preocupante: como han mostrado diversos estudios internacionales de carácter comparativo, en su mayor parte los conflictos de envergadura que persisten en el mundo tienen largos años de duración. La mayoría repuntó poco antes de la caída del Muro de Berlín y, en algunos casos (Israel-Palestina, India-Paquistán, Burma, Colombia, etc.), llevan varias décadas. De acuerdo con la experiencia internacional, estos «enfrentamientos prolongados» son los más difíciles de erradicar debido a los odios acumulados, a la dinámica perversa de represalias y contrarrepresalias y, sobre todo, a la desconfianza mutua entre actores y comunidades. Desde este punto de vista, la guerra entre Israel y Palestina es un caso paradigmático². Una situación similar se presenta en Colombia.

Sin embargo, al igual que otros conflictos de larga duración, como los de Angola o Sri Lanka, todo apunta a que en Colombia la guerra armada interna, lejos de agravarse, tiende también a su solución final. Todos los índices del país presentan una mejoría sustancial en los últimos dos años. Se ha fortalecido la seguridad pública (la cantidad de acciones guerrilleras y paramilitares ha disminuido de manera sustancial) y la seguridad ciudadana (el número de homicidios, la tasa de secuestros y otros delitos similares han caído notablemente) y, además, existe un mejoramiento significativo en el campo de los derechos humanos. La agonía puede llegar a ser, no obstante, larga, dolorosa y, en muchas ocasiones, brutal.

Hacia un «punto de inflexión»

En Colombia el debate en torno del actual balance estratégico del conflicto armado muestra una diversidad de perspectivas, abiertamente encontradas. Por una parte, el conocido columnista del diario *El Tiempo* y director de la Fundación Seguridad y Democracia, Alfredo Rangel, plantea que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –ante la ofensiva de las Fuerzas Armadas– se hallan replegadas en la selva profunda, intactas en su aparato militar, y a la espera del desgaste de la política de Seguridad Democrática del presidente Álvaro Uribe Vélez para retomar la iniciativa militar. Por otra parte, el Ministerio de Defensa plantea, por el contrario, que tanto las FARC como el Ejército de

2. Roy Licklider (ed.): *Stopping the Killing. How Civil War End*, New York University Press, Nueva York, 1993. La disminución de la guerra está acompañada, sin embargo, de un acrecentamiento del terrorismo en el ámbito mundial, mediante redes clandestinas: la llamada *netwar*.

Liberación Nacional están sufriendo un debilitamiento estratégico severo, razón por la cual su derrota militar es solamente cuestión de tiempo³.

Nuestra perspectiva difiere de las dos anteriores⁴. Rangel comete un grave error analítico al minimizar el debilitamiento estratégico de los grupos guerrilleros, en particular de las FARC. Defensa sostiene una visión triunfalista que, dado el carácter prolongado del conflicto colombiano y sus eternos vaivenes, es, a todas luces, inapropiada. Sin duda, el conflicto ha entrado en una «etapa de inflexión» en detrimento de los actores armados no estatales, pero la solución final solo será viable si el Estado puede garantizar la sostenibilidad financiera, política y social del proyecto de Seguridad Democrática, manteniendo y fortaleciendo el Estado de Derecho y, ante todo, comprometiendo a la comunidad internacional en la búsqueda de la solución negociada definitiva de la guerra interna. Si esta sostenibilidad no está plenamente garantizada, la agonía va a ser larga y traumática.

Nuestro argumento central a favor de la idea de un «punto de inflexión» en menoscabo de los actores armados no estatales se funda en la baja sostenibilidad de la guerra interna para estos grupos. Tanto el tiempo internacional como el tiempo nacional corren en su contra.

«**Cero tolerancia**». En el plano externo, tras los atentados terroristas de Al Qaeda en Nueva York y Washington el 11 de septiembre de 2001, existe en el plano mundial un clima de «cero tolerancia» hacia la violencia como recurso de acción política. Este clima se vio reforzado tras el ataque terrorista en Madrid el 11 de marzo de 2004. Es más, el empantanamiento de Estados Unidos en Irak le ha asestado un duro golpe al belicismo unilateral de la Casa Blanca. El «síndrome Vietnam» ha revivido en la opinión pública estadounidense y la aceptación de George W. Bush en las encuestas muestra una tendencia decreciente pronunciada. La renuncia del director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet, puede marcar el principio del fin de la facción neoconservadora que ha regido los destinos de Washington en los últimos cuatro años.

3. Por derrota militar no entiende el Ministerio de Defensa un aplastamiento total de los grupos guerrilleros, como ocurrió con los Montoneros en Argentina o los Tupamaros en Uruguay. Por derrota se entiende un debilitamiento estratégico que los lleve a la convicción de la imposibilidad de acceder al poder por la vía armada, a la idea de haber entrado en una etapa de desgaste irreversible y, por tanto, a la convicción de la negociación como única opción viable. Desde esta perspectiva, el Ministerio de Defensa sostiene que antes de 2006 los grupos irregulares de derecha e izquierda estarán todos sentados en la mesa de negociación.

4. Cf. Eduardo Pizarro: *Una democracia asediada. Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia*, Norma, Bogotá, 2004.

Estos cambios en el panorama internacional están teniendo un hondo impacto en el conflicto colombiano. No solo las FARC, el ELN y las Autodefensas Unidas de Colombia han sido incorporados en las listas de grupos considerados como terroristas por el Departamento de Estado y por la Unión Europea, sino que una parte de sus cúpulas dirigentes está siendo solicitada en extradición por Washington debido al tráfico de drogas. Es más, en el reciente informe de la influyente RAND Corporation se sitúa a las FARC al lado de Al Qaeda y Hizballah como uno de los tres grupos terroristas más amenazantes para la seguridad de EEUU: «Estos tres grupos, sostiene el informe, han demostrado los más altos niveles de hostilidad hacia EEUU y la más alta capacidad para llevar a cabo ataques sofisticados»⁵.

*Día a día,
el debilitamiento
estratégico
de las FARC
y el ELN
se hace más
y más palpable*

La sostenibilidad financiera de la guerra. Frente a este nuevo panorama internacional, los riesgos para los grupos guerrilleros colombianos son simple y llanamente dramáticos. Tras el final de la Guerra Fría y el agotamiento del apoyo financiero de los actores armados por parte de las grandes potencias, solo han podido subsistir aquellos conflictos en los cuales existen suficientes recursos internos para el sostenimiento de la dinámica militar⁶.

En Colombia, el secuestro y el tráfico de drogas se han convertido en los dos principales combustibles del conflicto interno, pero estas dos posibilidades constituyen un verdadero regalo envenenado para los grupos irregulares. Si continúan financiando la guerra mediante el secuestro, se acercan al Tribunal Penal Internacional de La Haya, que está juzgando los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la antigua Yugoslavia y en Ruanda y, muy pronto, en el resto del mundo. Si la siguen financiando mediante el tráfico de drogas, se arriesgan a ser extraditados a EEUU. Es decir, el financiamiento de la guerra interna se está convirtiendo en un verdadero cuello de botella para la guerrilla, cuyo proyecto militar muestra, desde esta perspectiva, una precaria sostenibilidad.

Debilitamiento estratégico. En el plano interno, el fortalecimiento de las instituciones militares y de policía en los últimos años gracias a un hondo esfuerzo financiero del Estado aunado al polémico Plan Colombia (que ha convertido a este país en el tercer receptor mundial de ayuda militar estadounidense des-

5. Klim Cragin y Sara Daly: *The Dynamic Terrorist Threat. An Assessment of Group Motivations and Capabilities in a Changing World*, Rand Corporation, Santa Mónica, 2004, p. 13.

6. V. Jean-Christophe Rufin y François Jean (eds.): *Les économies de guerre dans les conflits internes*, Hachette, París, 1996. Igualmente, Paul Collier y Anke Hoeffler: «Greed and Grievance in Civil War», Development Research Group, Banco Mundial, 2001.

***Pocos creen
 en las posibilidades
 reales de una solución
 exclusivamente militar
 a la guerra interna***

pués de Israel y Egipto), han puesto en evidencia hasta la saciedad la inutilidad de la violencia como mecanismo para acceder al poder. Día a día, el debilitamiento estratégico de las FARC y el ELN se hace más y más palpable. Estos grupos insurgentes han perdido importantes cuadros de dirección, territorios que se hallaban bajo su control desde tiempos inmemoriales, corredores estratégicos y cientos de militantes que se han acogido a las políticas que agencia el Estado para la reinserción individual: más de 3.000 combatientes en los últimos dos años. Se trata de un debilitamiento difícilmente reversible, por cuanto estas políticas de orden y seguridad tienen un fuerte respaldo ciudadano. Los colombianos repudian sin titubeos la guerra. La hora del «guerrillero heroico», que hace años pasó en América Latina, ya comenzó también su cuenta regresiva en Colombia.

¿Es verificable empíricamente este debilitamiento estratégico? Jorge Restrepo y Michael Spargat, del Departamento de Economía del Royal Holloway College de la Universidad de Londres, han desarrollado la primera base de datos (fechas, lugares, actores involucrados, tipos de ataque, número de víctimas, etc.) sobre el conflicto colombiano basada en una serie de tiempo largo (18 años)⁷. Sus principales conclusiones podrían resumirse así: primero, en los últimos dos años las acciones armadas de los grupos guerrilleros y paramilitares han disminuido de manera significativa; segundo, los combates entre la fuerza pública y los paramilitares han aumentado considerablemente; tercero, en los enfrentamientos entre la fuerza pública y los actores armados no estatales, éstos están llevando la peor parte.

Estos cambios internos y externos están teniendo un hondo impacto en la dinámica del conflicto armado. Por una parte, en cuanto a las AUC, la reconstrucción del Estado y el fortalecimiento de las FFAA y de policía ha disminuido la dependencia estratégica de esos movimientos criminales para sostener el orden público. Hoy, el apoyo abierto o soterrado a estos grupos de distintos segmentos de las elites civiles o militares es más oneroso –dados los costos internacionales para la imagen estatal– que buscar su desaparición, ya sea mediante la vía negociada o la militar. Por otra parte, en relación con los grupos guerrilleros, éstos han ido perdiendo la iniciativa militar y se encuentran enfrentados a un mundo crecientemente hostil a sus prácticas reprobables. Ni política ni militarmente la guerrilla significa en la actualidad un desafío real para las instituciones políticas.

7. «The Colombian Conflict: Uribe's First 17 Months», University of London, Londres, 2004, inédito.



¿Solución militar o política?

En Colombia pocos creen en las posibilidades reales de una solución exclusivamente militar a la guerra interna. La extensión y la complejidad del territorio, la extrema dispersión de los focos de enfrentamiento, la alta porosidad de las fronteras tanto terrestres como marítimas, y la existencia de amplios recursos para el financiamiento de los grupos armados (en particular las drogas ilícitas y la industria del secuestro) hacen muy improbable una salida por la vía militar. Sin duda, el fortalecimiento del Estado ha constituido un factor determinante para gestar un nuevo escenario favorable que permita acabar con el conflicto armado; tarde o temprano, su desenlace final tendrá como escenario la mesa de negociación, donde será indispensable una fuerte presencia de la comunidad internacional.

¿Es realista pensar que estas negociaciones arranquen bajo el actual gobierno de Uribe, catalogado en múltiples círculos nacionales e internacionales como un mandatario de la derecha militarista? Todo parece indicar que sí, tanto si nos atenemos a la experiencia de América Latina como al curso actual de los acontecimientos en el país.

En efecto, la gran paradoja en el continente, tal como lo demuestran las experiencias en El Salvador y Guatemala, es que los gobiernos de derecha han sido más aptos para llevar a cabo negociaciones exitosas que las administraciones de centro o de centroizquierda. Tanto en El Salvador como en Guatemala, los procesos de paz se iniciaron o activaron bajo gobiernos de centro. En el primer caso, ese debut tuvo lugar bajo las orientaciones del presidente José Napoleón Duarte (1984-1989), miembro fundador del Partido Social Cristiano, de centro-reformista. En Guatemala, el proceso de negociación experimentó un serio impulso bajo el mandato del ex-procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio (1993-1996), quien se posesionó de la presidencia tras la caída de Jorge Serrano Elías, sustituido tras llevar a cabo un autogolpe de Estado en 1993, cerrando el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Pero, ni Duarte ni Carpio pudieron sellar la paz.

En El Salvador, la firma de los acuerdos de paz fue refrendada entre el gobierno de Alfredo Cristiani y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en presencia de las Naciones Unidas, en el Castillo de Chapultepec, Ciudad de México, el 16 de enero de 1992. El hecho impactante es que haya sido un presidente electo bajo las banderas del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista, fundado por el tenebroso mayor del Ejército, Roberto

D'Aubuisson Arrieta, quien estampara su firma en dichos acuerdos. Atrás quedaron 12 años de guerra, 75.000 muertos y cientos de miles de exiliados y refugiados.

En Guatemala, la firma de los acuerdos de paz con la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca (UNRG) se llevó a cabo el 26 de diciembre de 1996 durante el mandato del presidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000), líder del Partido de Avanzada Nacional, de la derecha empresarial moderada. Con la elección de Arzú el 14 de enero de 1996, la pacificación avanzó de manera acelerada. En mayo de 1996 se suscribe el «Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria», y unos meses después se arriba a otro de los acuerdos sustantivos: el de «Fortalecimiento del poder civil y función del Ejército en una sociedad democrática». Finalmente, llega el momento más esperado de todo este proceso: el 29 de diciembre de 1996, Arzú, la comandancia guerrillera de la URNG y Jean Arnault, moderador de la ONU, decretan, mediante una firma, el fin del enfrentamiento armado que duró más de tres décadas.

*Lentamente
se está abriendo paso
un proceso de paz
con las AUC y el ELN*

¿Cómo explicar este fenómeno? A mi modo de ver, un presidente de derecha moderada constituye un interlocutor creíble para los movimientos insurgentes, en la medida en que dispone de amplios recursos de poder, pues puede garantizar la cohesión del Estado para las negociaciones y es, por tanto, previsible en sus acciones y claro en sus objetivos. Por el contrario, presidentes de centro o centroizquierda generan escepticismo en las propias filas gubernamentales y en sectores extremistas de las fuerzas de seguridad, quienes buscan sabotear los esfuerzos de paz. En las elites conservadoras colombianas nadie cree que Uribe pueda llevar a cabo pactos secretos con la guerrilla en detrimento de sus intereses, de ahí la cohesión estatal que no existió ni bajo Ernesto Samper (1994-1998), ni bajo Andrés Pastrana (1998-2002).

Se trata, pues, de una gran paradoja. En medio del escepticismo general, lentamente se está abriendo paso un proceso de paz con las AUC y el ELN y, más temprano que tarde, todo indica que ocurrirá lo mismo con las FARC.

La suerte de los actores armados

Las Autodefensas Unidas de Colombia. Se han convertido en un fenómeno sin antecedentes en América Latina. Si inicialmente parecían asimilarse a otras ex-

periencias latinoamericanas como las «patrullas armadas campesinas» de Guatemala (PAC) o los «comités de autodefensa civil» (CAD) o «rondas campesinas» del Perú, poco a poco, debido a sus vínculos profundos con el tráfico de drogas, se han transformado en típicos «señores de la guerra», similares en sus características básicas a aquellos que pululan en Afganistán, Irak o Sierra Leona. Stergios Skaperdas sostiene que

el término «señor de la guerra» se refiere a personajes poderosos (*strongmen*) que no obedecen órdenes de las altas autoridades centrales y controlan una región gracias a su capacidad para desarrollar la guerra. Ese poder de los *warlords* y su capacidad para acorralar a las frágiles autoridades y a los grupos competidores depende en buena medida de una economía de guerra, la cual a menudo incluye su integración a las redes de comercio internacional.⁸

De ahí la enorme complejidad del proceso de negociación que se ha abierto con este controvertido movimiento, cuyas raíces políticas de carácter contrainsurgente han dado paso a «empresarios de la coerción»⁹, es decir, a grupos que a cambio de extorsión venden seguridad regional y a la vez se enriquecen con el tráfico de drogas.

En la opinión pública colombiana existe un agudo debate en torno del carácter de las conversaciones que se van a desarrollar con las AUC: para algunos, dada la índole cuasidelincuencial de este movimiento, solo es posible desarrollar diálogos tendientes a su sometimiento a la justicia, tal como ocurrió con Pablo Escobar durante el gobierno de César Gaviria. Para otros, teniendo en cuenta el origen contrainsurgente de esta agrupación, es indispensable darle un carácter político a las negociaciones, que deben ser similares a las conducidas en el pasado con grupos guerrilleros tales como el M-19 o el Ejército Popular de Liberación (EPL). Este último es el planteamiento básico de la cúpula paramilitar.

El gobierno actual, para eludir este intrincado debate, reformó la ley que exigía un reconocimiento previo de un actor armado como actor político para poder entrar en un proceso de negociación. El Artículo 3 (parágrafo 1) de la Ley 782 de 2002 dice, al respecto, lo siguiente: «De conformidad con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y para los efectos de la presente ley, se entiende por grupo armado al margen de la ley aquel que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerza sobre una parte del territorio un control tal que le permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas»¹⁰. Mediante

8. «Warlord Competition» en *Journal of Peace Research* vol. 39 N° 4, 2002, p. 575.

9. V. el trabajo de Mauricio Romero: *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Iepri / Planeta Colombiana, Bogotá, 2003, p. 17.

10. Uno de los cuellos de botella para un eventual proceso de negociación con las AUC era la imposibilidad de llevar a cabo conversaciones con un grupo no rebelde, o sea, que no encajaba propia-

este subterfugio jurídico, el Gobierno buscó superar un gran escollo existente en la tradición jurídica del país, la cual planteaba que solo era posible negociar con grupos rebeldes y jamás con grupos defensores a ultranza del *statu quo*.

¿Por qué negocian los líderes paramilitares? Existen al menos tres razones convergentes. En primer lugar, debido a la solicitud de extradición de la cúpula de las AUC a EEUU por cargos de narcotráfico y terrorismo, la dirigencia de las mismas cree que podrá negociar su no extradición a cambio de la desmovilización de sus huestes y el rechazo al tráfico de drogas. En segundo lugar, como hemos sostenido, la pérdida de valor estratégico de las AUC, gracias al fortalecimiento de las FFAA en los últimos seis años, ha reducido la dependencia estratégica de los paramilitares para el control territorial. Finalmente, ante esa pérdida del valor contrainsurgente de las AUC, la relación costo-beneficio de la persistencia de las autodefensas va en claro detrimento de las instituciones estatales: el daño nacional e internacional a la imagen del Estado y a la oficialidad de las FFAA por sus relaciones con esos grupos es mayor que los beneficios actuales de su participación en la guerra contrainsurgente.

***Al ELN
no le queda más
que una salida
negociada
para su inserción
en la vida política***

No se va a tratar, sin embargo, de una negociación fácil. Dadas las fronteras ambiguas entre la dimensión política contrainsurgente de los grupos paramilitares y sus vínculos profundos con el tráfico de drogas, las negociaciones se van a mover en un campo minado, pero nadie duda de que una eventual desmovilización de las AUC traería enormes beneficios para Colombia. De un lado, se sortearía una inevitable descomposición bandoleril de esos grupos, como ya puede observarse en muchas zonas del país. Del otro lado, se podría recuperar y fortalecer la legitimidad estatal, al acabar de tajo sus dudosos vínculos con estos grupos criminales; habría una disminución de la tasa de homicidios y mejorarían los registros sobre derechos humanos. Finalmente, se obligaría al Estado a garantizar la seguridad pública y privada sin la compañía de grupos de justicia al margen de la ley. Probablemente, el impacto más deseable estaría relacionado con el proceso de paz con los grupos guerrilleros, ya que una eventual desaparición

mente en la categoría de delincuente político. Para sortear ese obstáculo, el gobierno de Uribe reformó la ley 418 de 1997 (que, a su vez, había sido prorrogada y modificada mediante la ley 548 de 1999), al permitir negociaciones con cualquier grupo armado al margen de la ley, es decir, ya no es necesario, como en el pasado, darle una categoría de actor político a un actor armado para negociar. De esta forma se elude el complicado asunto de otorgarle un estatus político a los grupos paramilitares, lo cual tenía dos riesgos: el de la legitimación y el de los costos políticos.

ción de las AUC permitiría crear un mayor clima de confianza, en tanto los eventuales riesgos de retaliaciones brutales desaparecerían en gran medida. Esa fue la experiencia en El Salvador con el desmantelamiento de los tenebrosos «escuadrones de la muerte». Este hecho constituyó una condición previa y necesaria para el inicio en serio de las negociaciones de paz con el FMLN.

***El conflicto armado
ha experimentado
un punto de inflexión
a partir de 1998,
en detrimento
de los actores armados
no estatales***

El Ejército de Liberación Nacional. El debilitamiento estratégico del ELN es cada día más pronunciado. No solo su capacidad militar, sino incluso su credibilidad política, han sufrido una mengua profunda. Si hace unos pocos años Alemania fue el escenario de importantes encuentros de paz entre este grupo y miembros influyentes de la sociedad civil colombiana, durante 2004, por iniciativa del propio gobierno alemán, el ELN fue incorporado a la lista de grupos terroristas de la UE.

Ante este oscuro panorama, las opciones de supervivencia del ELN se han ido reduciendo de manera dramática. La alternativa de persistir en el conflicto bélico es insostenible, pues sus debilitados frentes de guerra están siendo absorbidos por las FARC en algunas regiones y por las AUC en otras, como ocurrió en la conflictiva ciudad petrolera de Barrancabermeja. Por ello, solo le quedan dos opciones reales: una integración con las FARC o una negociación política con el Estado. La perspectiva de integración con las FARC en términos de igualdad –tal como ocurrió con el FMLN en El Salvador o la URNG en Guatemala, que pasaron a conformar un «estado mayor conjunto» con otros grupos guerrilleros– no es posible debido a la tradición hegemónica de las FARC. Esta agrupación no acepta integraciones, sino absorciones pasivas y subordinadas. Es impensable que el Secretariado de las FARC acepte la incorporación del Comando Central del ELN a sus rangos en términos equitativos, con la fusión de ambas direcciones en un estado mayor conjunto.

Ante este oscuro panorama, las opciones de supervivencia del ELN se han ido reduciendo de manera dramática. La alternativa de persistir en el conflicto bélico es insostenible, pues sus debilitados frentes de guerra están siendo absorbidos por las FARC en algunas regiones y por las AUC en otras, como ocurrió en la conflictiva ciudad petrolera de Barrancabermeja. Por ello, solo le quedan dos opciones reales: una integración con las FARC o una negociación política con el Estado. La perspectiva de integración con las FARC en términos de igualdad –tal como ocurrió con el FMLN en El Salvador o la URNG en Guatemala, que pasaron a conformar un «estado mayor conjunto» con otros grupos guerrilleros– no es posible debido a la tradición hegemónica de las FARC. Esta agrupación no acepta integraciones, sino absorciones pasivas y subordinadas. Es impensable que el Secretariado de las FARC acepte la incorporación del Comando Central del ELN a sus rangos en términos equitativos, con la fusión de ambas direcciones en un estado mayor conjunto.

Frente a una situación tan difícil, al ELN no le queda más que una salida negociada para su inserción en la vida política. El fortalecimiento de un polo de izquierda democrática en Colombia –al igual que en el resto de América Latina– crea un espacio para que este grupo guerrillero pueda hacer el tránsito de las «armas a la política» sin mayores traumatismos. Este es, a mi modo de ver, el único y más deseable escenario para el ELN si no quiere terminar en una descomposición interna o en una fusión subordinada a las FARC. Por ello, la propuesta de Uribe al gobierno mexicano para que éste desempeñe un papel

activo en un futuro proceso de negociación con el ELN, así como la rápida aceptación tanto del presidente Vicente Fox como del Comando Central de la organización guerrillera, ha abierto un margen para el optimismo en Colombia.

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La poderosa onda expansiva de las FARC ha comenzado a revertirse en los últimos dos años. A mediados de los 90 esta organización insurgente dio un salto estratégico que cogió desprevenidas a las FFAA, las cuales sufrieron los peores retrocesos militares de toda su historia. Este salto consistió en el paso de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos, mediante la cual las FARC cercaron y aniquilaron unidades elite del Ejército en el sur del país. Las Delicias, San Juanito, Patascoy y El Billar se convirtieron en símbolos de la «revolución estratégica» de las FARC durante el débil gobierno de Samper. Esta ventaja táctica desapareció, sin embargo, a partir de 1998. Bajo el impacto del Plan Colombia y un fuerte esfuerzo financiero del Estado colombiano, las FARC perdieron la iniciativa táctica y desde esa lejana fecha no han podido volver a llevar a cabo ninguna acción de significación estratégica. Por el contrario, ante la superioridad aérea, fluvial y terrestre de las FFAA se vieron obligadas a volver a la guerra de guerrillas, es decir, al método de lucha que han practicado durante cuatro décadas sin ningún éxito.

En vista de esa derrota estratégica, las FARC intentaron combinar las acciones guerrilleras con los actos terroristas urbanos. La explosión de un carro-bomba en el Club El Nogal, en Bogotá, por el cual murieron decenas de civiles, constituyó una experiencia piloto con consecuencias trágicas para el propio grupo insurgente. En un clima internacional de horror hacia el terrorismo, esta modalidad de acción solo le significó a las FARC un rechazo que ahogó las pocas simpatías que despertaban en segmentos de la opinión pública nacional e internacional. Múltiples santuarios de esta agrupación en distintos países del mundo (tales como México o Suiza) se cerraron de golpe.

Desde mi perspectiva, las acciones brutales de Al Qaeda sepultaron el terrorismo de otros grupos similares –en cuanto a



los métodos de acción— en Occidente. Así como es poco creíble que ETA pueda retomar la vía terrorista en una España horrorizada con el 11 de marzo, igualmente es poco creíble que las FARC puedan utilizar esa herramienta de acción sin mayores costos internos e internacionales. En pocas palabras, el grupo guerrillero se está quedando sin opciones estratégicas viables.

En conclusión

Así pues, el conflicto armado en Colombia ha experimentado un punto de inflexión a partir de 1998, en claro detrimento de los actores armados no estatales. ¿Se podrá consolidar este proceso en favor de la paz? A mi modo de ver, si bien los grupos irregulares han comenzado una etapa de retroceso e incluso de descalabros significativos tanto en el plano político como militar —pues tanto el tiempo nacional como el internacional corren a contravía de sus aspiraciones—, el conflicto armado está afectando igualmente a las elites nacionales. Según el Departamento Nacional de Planeación, año tras año el país pierde dos puntos del PIB como consecuencia de la violencia, es decir, alrededor de 1.800 millones de dólares anuales. Por ello, Colombia se está acercando rápidamente a lo que los expertos en resolución de conflictos denominan un «empate mutuamente doloroso» (*mutual hurting stalemate*)¹¹. Según esta noción, un conflicto entra en un periodo favorable para su solución negociada cuando existe un reconocimiento compartido entre todos los actores enfrentados de la imposibilidad de alcanzar una victoria por la vía militar, por lo cual la persistencia de la confrontación tiene costos profundos para unos y otros.

Eso fue lo que ocurrió tanto en El Salvador como en Guatemala en circunstancias muy disímiles. En el primer caso, con una guerrilla intacta que, sin embargo, había perdido su retaguardia estratégica con la derrota de los sandinistas en las elecciones de 1990 que llevaron al poder a Violeta Chamorro. En el segundo caso, con una guerrilla brutalmente debilitada. En uno y otro caso, la persistencia de la confrontación armada imposibilitaba a las elites guatemaltecas y salvadoreñas a generar un clima de seguridad interna necesaria para su inserción positiva en un mercado globalizado. Por ello, en una y otra nación, tanto la persistencia de la insurgencia como el mantenimiento de un costoso aparato de contrainsurgencia eran catastróficos para ambos bandos. Lo mismo está ocurriendo en Colombia. La guerra ya no es sostenible para la guerrilla; tampoco para las elites en el poder.

11. William Zartman: «Ripeness: The Hurting Stalemate and Beyond» en Paul Stern y Daniel Druckman (eds.): *International Conflict Resolution after the Cold War*, National Academy Press, Washington, 2000.